

les á la Suprema Corte de Justicia para la revision que ordena la ley.

Mérida, Diciembre ocho de mil ochocientos setenta.—(Firmado.)—*Prudencio Iruelos.*

#### *Sentencia del Juez de Distrito.*

Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan. Mérida, Diciembre veintitres de mil ochocientos setenta.

Visto este juicio de amparo solicitado por los ciudadanos Pedro José Campos, Felipe Santiago Samada y Nicanor Patron, vecinos de Cizantun, contra el ciudadano Gefe Político de su partido, por habérseles aplicado la pena del artículo 84 de la ley local electoral de 25 de Abril de 1862, por las faltas en que incurrieron en las elecciones municipales de 6 de Noviembre del corriente, con cuya aplicacion, que fué de prision, violó los artículos 16 y 21 de la Constitucion federal; el auto en que se mandó que á reserva de que ocurrieran en la forma prescrita por la suprema ley de 20 de Enero del año próximo pasado, se les pusiera en libertad, en el concepto de estar presos de un modo indefinido, como aseguraban; la contestacion del Gefe Político dicho, fojas 2 vuelta, que dice: que la multa ó prision que mandó imponerles, es conforme al artículo 84 de la ley citada de 25 de Abril de 1862, por lo que debian continuar en prision; pero que sin embargo, esperaba la resolucion del gobierno del Estado á quien habia dado cuenta, el auto fojas 4, en que se le previno á la referida autoridad pusiese en el acto en libertad á los quejosos, por no ser el juez competente que expresa el artículo 84 de la ley electoral para aplicarlo, con apercibimiento de que se cumpliría el artículo 7º de la ley de 20 de Enero citada, si no obedecia, pues, estaba faltando á los artículos 16 y 21 de la Constitucion general; su contestacion fojas 6, en que manifiesta: que no ha violado los artículos constitucionales citados, por no haberse ab-

rogado facultades de competencia judicial, sino que solo excitó á que se cumpliese el artículo 84 de la ley electoral y que los quejosos estaban ya bajo el dominio del juez competente, segun el oficio del gobierno que acompañaba, en el que se le prevenia consignarlos al Juez de paz de Cizantun: el auto fojas 9, en que de conformidad con el artículo 19 de la referida ley de 20 de Enero, se dispuso dirigir oficio al gobierno del Estado para que mandara poner en libertad á los quejosos, porque aún cuando hubiesen sido consignados al juez de paz de Cizantun, no siendo el competente para dictar contra ellos auto motivado de prision, con esta se continuaba violando el art. 19 de la Constitucion general en ellos; la contestacion del gobierno mandando hacerlo saber al Gefe Político para cumplir la ley; pero manifestando que hecha la consignacion á la autoridad judicial, ya no pueden las políticas disponer de los presos hasta la ejecucion de la sentencia; pareciéndole mas bien que este Juzgado se entienda con el que conoce de la causa con su superior respectivo; el informe del Gefe Político diciendo: que habia ya consignado á los quejosos á la autoridad judicial y que á esta tocaba ponerlos en libertad, debiéndose tener en cuenta, que por aquellas localidades no hay la suficiente instruccion para guardar los trámites de la ley; el pedimento fiscal; la citacion para sentencia; y considerando: que aunque los quejosos hayan faltado en las elecciones municipales de 6 de Noviembre de este año, y que esta falta deba ser castigada, sin remision alguna, porque siempre se debe respetar como la cosa mas sagrada el sufragio de los pueblos, y el que no respeta este derecho, rompe sus títulos de republicano y se hace digno de la execucion pública, tambien es cierto que para imponer el castigo, se deben guardar las formas tutelares del juicio que acuerda la ley: que conforme al artículo 84 de la ley local de 25 de Abril de 1862, en casos como el presente, impondrá al culpable el juez competente la pena de cien pesos

de multa, ó un mes de prision: que esta disposicion está de acuerdo con el artículo 21 de la Constitucion federal y en consecuencia á los quejosos se les debieron otorgar las garantías del artículo 20 del Código fundamental: que ademas, se debió empezar por consignarlos al juez competente, quien con prueba plena del delito y semi-plena del delincuente, hubiera dictado el auto motivado de prision, respetando el artículo 16, si así lo hubiere estimado, pues juzgando por el primer extremo de la pena que señala la ley, no se debió iniciar por prision tratándose de pena pecuniaria, con arreglo al artículo 18 constitucional: que fuera de lo expuesto, los quejosos aparecen en autos, presos desde el 6 hasta el 26 de Noviembre, sin auto motivado de prision, porque aunque se diga que fueron consignados al juez de paz de Oicantun, este no es el competente para poderlo dictar ni á quien debia hacerse la consignacion, sino al de 1ª instancia del Departamento judicial respectivo, no siendo el caso urgente ni de pena corporal, para que obrara conformando sus procedimientos á los artículos constitucionales citados y al 19 que tambien resulta violado: que no apareciendo consignados los quejosos al juez competente y estando probado por el oficio del Gefe Político de aquel partido, fojas 7, dirigido al presidente municipal de Oicantun que la pena fué aplicada administrativamente, este juzgado no podia mandar suspender el acto reclamado, sino á la autoridad de quien procedia: que no puede alegarse que el Gefe Político haya obrado segun la segunda parte del artículo 21 del Código federal, porque no habiéndose resuelto por el Congreso de la Union si se refiere solo al Ejecutivo federal, ó se extiende tambien á los gobernadores de los Estados, mal puede decirse que llegue hasta los gefes políticos la facultad de imponer la pena que señala. ¿Por estos fundamentos legales y de conformidad con el pedimento fiscal, la autoridad, en nombre de los Supremos poderes de la Union, decreta: 1º Que la justicia nacional ampara

y protege á los quejosos, contra los actos del ciudadano Gefe Político del partido de Temax, en virtud de los cuales aparecen presos desde el 6 hasta el 26 de Noviembre de este año, sin mandamiento escrito de la autoridad competente y sin auto motivado de prision, pena propiamente tal, impuesta no por autoridad judicial competente al efecto; sin perjuicio de ser consignados, como consta que lo están ya, al Juez de 1ª instancia respectivo. 2º Agréguese en seguida la ley electoral de 25 de Abril de 1862; y sáquese testimonio de este fallo para su publicacion; elevándose originales los autos á la Suprema Corte de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos, para su revision, ambas cosas conforme á los artículos 18 y 27 de la ley suprema de 30 de Enero de 1869. Hágase saber. — (Firmados.) — *I. Manzanilla.* — Ante mí. — *José Anacleto Castillo.*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Febrero seis de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito de Yucatan por Pedro José Campos, Felipe Santiago Samad y Nicanor Patron, contra el Gefe Político del partido de Temax, por haberles aplicado la pena del artículo 84 de la ley local electoral de 25 de Abril de 1862, por las faltas en que se dice incurrieron en las elecciones municipales de 6 de Noviembre de 1870; violándose las garantías á que se refieren los artículos 16 y 21 de la Constitucion general; y considerando: que de las constancias del expediente aparece, que los quejosos fueron consignados con posterioridad al juez competente, lo cual hace ya innecesario el amparo que se solicita, pero que tambien aparece que no fué obsequiado el auto del Juzgado de Distrito que dispuso, que se suspendieran los efectos del acto

reclamado, lo cual importa la inobediencia de lo prevenido en los artículos 7º y sus relativos de la ley de 20 de Enero de 1869; por lo expuesto, y con arreglo á lo que previene la Constitucion federal en el artículo 101, se decreta: 1º que se revoca la sentencia del Juez de Distrito de Yucatan, pronunciada en 23 de Diciembre último, que declara: que la justicia de la Union ampara y protege á los quejosos contra los actos del Gefe Político de Temax, en virtud de los cuales quedaron presos desde el 6 hasta el 26 de Noviembre del año próximo pasado, sin mandamiento escrito de autoridad competente y sin auto motivado de prision.

2º Que el Juez de Distrito proceda conforme al artículo 7º y sus relativos de la ley de 20 de Enero de 1869, contra las autoridades que no suspendieron el acto reclamado.

Devuélvanse las actuaciones al mencionado Juez de Distrito, con copia de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquense por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.) *S. Lerdo de Tejada.*—*P. Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Febrero diez y seis de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustin Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido por el C. Márcos Rivas contra el Mayor de la fuerza de seguridad pública.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

Se ha impuesto el Promotor fiscal de las constancias de este expediente, promovido con motivo del juicio de amparo que el día 8 del corriente promovió el C. Márcos Rivas, por haber sido mandado á la cárcel en el acto de estarse verificando en esta Capital las elecciones de Diputados á la legislatura del Estado, por el C. José M. Gambino, Comandante de la fuerza de seguridad pública.

Como Márcos Rivas fué puesto en libertad al siguiente día, no existe, en concepto del promotor, la causa que motivó la petición de amparo; y si algunos perjuicios se le siguieron por la prision que sufrió, está en su derecho para exigir su reparacion con arreglo á las leyes comunes; pero no como un amparo que es ya improcedente, puesto que no se ha continuado en la violacion de las garantías de que hace mérito en el escrito con que da principio el juicio.

Por esta misma razon, no cree el Promotor necesario abrir á prueba el negocio para acreditar si son ó no ciertos los hechos que refiere el C. Gambino, en la comunicacion de fojas siete que remitió á este Juzgado por vía de informe y para justificar los motivos que tuvo para mandar á la cárcel á Rivas, pues la comprobacion de tales hechos no tiene ya objeto, y sobre todo, si el mencionado Rivas cree infundada la inculpacion que le hace Gambino, el Promotor repite que puede deducir sus derechos ante la justicia ordinaria.

Por lo expuesto, el Promotor concluye pidiendo: que se sobresea en el presente juicio y se dé cuenta con él á la Suprema Corte de Justicia para la revision del auto de sobreseimiento.